Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México, a veinticuatro de enero de dos mil veinticuatro.

**VISTO** el expediente formado con motivo del recurso de revisión **03919/INFOEM/IP/RR/2023**, interpuesto por **XXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXX,** en lo sucesivola parte **Recurrente,** en contra de la respuesta a su solicitud por parte de la **Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna,** en lo sucesivo el **Sujeto Obligado,** se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes:

**I. A N T E C E D E N T E S**

**1. Solicitud de acceso a la información.** Con fecha **cuatro de julio de dos mil veintitrés,** la parte **Recurrente** presentó, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense, en lo subsecuente el **SAIMEX,** ante el **Sujeto Obligado**, la solicitud de acceso a la información pública, a la que se le asignó el número **00081/CEPANAF/IP/2023,** mediante la cual requirió la información siguiente:

*“El artículo 69 S Sexies, párrafo segundo, del Código Financiero del Estado de México y Municipios establece sobre el Impuesto a la Emisión de Gases Contaminantes a la Atmósfera que: "Los recursos recaudados derivados del impuesto previsto en esta Sección, se destinarán a acciones para garantizar el derecho de las personas a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar" (sic). 1. Solicito se indique si este sujeto obligado realizó, entre el 1 de abril de 2022 y la fecha de esta solicitud, alguna acción que hayan sido financiadas por el dinero recaudado por el Impuesto a la Emisión de Gases Contaminantes a la Atmósfera para el cumplimiento del artículo antes descrito. En su caso solicito se indiquen tales acciones, y se desglose la información por: (1) Fecha o rango de fechas en la que se realizó la acción (2) Descripción de la acción (3) Dependencia gubernamental que se encargó de realizar la acción (4) Nombres de los servidores públicos responsables de realizar la acción (5) Financiamiento o monto total invertido para realizar la acción 2. Solicito copia simple, en su versión pública, de toda expresión documental que dé cuenta de dichas acciones descritas en el numeral 1 de esta solicitud. Lo anterior incluye, de forma enunciativa más no limitativa, toda fotografía, factura, estado de cuenta, oficio, convenio firmado con la Secretaría de Finanzas, etc.****”*** *(sic)*

**Modalidad de Entrega:** a través de **SAIMEX**

**2. Respuesta.** Con fecha **cinco de julio de dos mil veintitrés**, el **Sujeto Obligado** envió su respuesta a la solicitud de acceso a la información a través de SAIMEX, sustancialmente en los términos siguientes:

*“…En virtud de lo anterior y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 167 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, le informo que este Organismo no es competente para dar atención a su solicitud; Por lo anterior se le sugiere respetuosamente dirigir su petición a la Instancia correspondiente, con la finalidad de que obtenga una respuesta oportuna. Finalmente, este Organismo reitera su disposición para que en el ámbito de sus atribuciones y/o facultades, contribuya en las acciones que así considere pertinentes…” (sic)*

El **Sujeto Obligado** adjuntó el oficio número 221C0101000002S-0276/2023, de fecha cinco de julio de dos mil veintitrés, signado por la Titular de la Unidad de Transparencia, mediante el cual, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 167 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, informó que el Organismo no es competente para dar atención a la solicitud, sugiriendo a la persona solicitante dirigir su petición a la Instancia correspondiente, con la finalidad de que obtenga una respuesta oportuna.

**3. Interposición del recurso de revisión.** Inconforme con los términos de la respuesta emitida por parte del **Sujeto Obligado**, el **cinco de julio de dos mil veintitrés,** la parte **Recurrente** interpuso el recurso de revisión a través de **SAIMEX,** en donde se manifestó de la siguiente manera:

**Acto impugnado:**

*“El sujeto obligado se declaró incompetente para responder todos los numerales de mi solicitud, sin dar ningún fundamentación de por qué es incompetente y pese a que sí hay motivos de convicción para suponer que es competente para responder mi solicitud. Tampoco me orientó hacia los sujetos obligados que, según la CEPANAF, son competentes para responder mi solicitud.” (sic)*

**Y, Razones o motivos de inconformidad**:

*“El sujeto obligado no argumentó por qué no es competente para responder mi solicitud; pese a que el artículo 17 fracción III, IX, X, XI, XII, XV del Reglamento interior de la CEPANAF y los artículos 3 fracción I, II, III y VI y 4, fracción I, II, V, VI, VII, VIII, IX del Decreto del Ejecutivo del Estado por el que se transforma el órgano desconcentrado denominado Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna en organismo público descentralizado permiten suponer que este sujeto obligado sí es competente para responder mi solicitud. Con su respuesta, no me queda claro si la CEPANAF realizó, entre el 1 de abril de 2022 y la fecha de esta solicitud, alguna acción que hayan sido financiadas por el dinero recaudado por el Impuesto a la Emisión de Gases Contaminantes a la Atmósfera, por lo que, con su respuesta, este sujeto obligado transgrede los principios de certeza, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia expresados en el artículo 8 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y vulnera mi derecho de acceso a la información. Con base en lo anterior, procede este recurso de revisión conforme la fracción IV del artículo 179 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios. Solicito una resolución que instruya al sujeto obligado a realizar una búsqueda exhaustiva qué dé certeza si es competente o no para responder mi solicitud y que, en su caso, entregué lo solicitado en el numeral 1 y 2 de mi solicitud, por favor.****”*** *(sic)*

**4. Turno.** De conformidad con el artículo 185 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios vigente, el presente recurso de revisión se turnó por el sistema electrónico del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, a la Comisionada **Guadalupe Ramírez Peña,** a efecto de que analizara sobre su admisión o su desechamiento.

**5. Admisión del Recurso de revisión.** Con fecha **diez de julio de dos mil veintitrés,** este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, admitió a trámite el recurso de revisión que ahora se resuelve, dando un plazo máximo de siete días hábiles para que las partes manifestaran lo que a su derecho resultara conveniente, ofrecieran pruebas, formularan alegatos y el **Sujeto Obligado** presentara su informe justificado.

**6. Manifestaciones**. En fecha **catorce de julio de dos mil veintitrés,** el **Sujeto Obligado,** remitió, a través de SAIMEX, su informe justificado, mediante el cual la Unidad de Transparencia refiere que de los preceptos normativos referidos por la parte **Recurrente** en el recurso de revisión, no se aprecia referencia alguna de que el Organismo realice acciones financiadas con dinero recaudado por el Impuesto a la Emisión de Gases Contaminantes a la Atmósfera, asimismo hace hincapié en que bajo ninguna circunstancia el Organismo se ha pronunciado de manera negativa, como refirió la parte Recurrente, ya que se dio atención a la solicitud de manera oportuna y conforme a lo establecido en la normatividad aplicable, y, finalmente, reitera que el Organismo no es competente para atender la solicitud, al no corresponder con atribuciones del mismo, solicitando en el acto se sobresea el recurso de revisión al considerar que no actualiza alguno de los supuestos previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Por otro lado, la parte **Recurrente** fue omisa en presentar alegatos o manifestación alguna en el plazo establecido para tal efecto.

**7. Ampliación del término para resolver**. En fecha **nueve de octubre de dos mil veintitrés**, se amplió el término para resolver el recurso de revisión en términos del artículo 181 párrafo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Este organismo garante no pasa por alto justificar, que el plazo para emitir la resolución en el presente asunto encuentra justificación en el alto número de recursos de revisión recibidos, circunstancia atípica que ha rebasado las capacidades técnicas y humanas del personal encargado de la proyección de las resoluciones a dichos medios de impugnación.

Por ello, es menester precisar que, si bien se ha excedido el plazo para resolver el presente medio de impugnación, de conformidad con la ley de la materia, el plazo para emitir la resolución se encuentra justificado en los elementos para medir la razonabilidad de asuntos conforme a los parámetros establecidos por diversos órganos jurisdiccionales federales, aplicables también en procedimientos análogos, como el que nos ocupa.

Así, en términos de lo que establecen los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los recursos deben ser sencillos y resolverse en el menor tiempo posible, tomando en consideración la dilación total del procedimiento; esto es, en un plazo razonable.

En ese sentido, el legislador fijó los términos procesales en las leyes, de manera general, sin que pudiera prever la variada gama de casos que son resueltos por los órganos jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales, tanto por la complejidad de los hechos, como por el número de casos que conocen.

Por ello, excepcionalmente, si un asunto es resuelto con posterioridad a los plazos señalados por la norma debe analizarse la razonabilidad del tiempo necesario para su resolución, atentos a los siguientes criterios:

1. Complejidad del Asunto: La complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales, el tiempo transcurrido, las características y contexto del recurso.
2. Actividad Procesal del interesado. Acciones u omisiones del interesado.
3. Conducta de la Autoridad: Las Acciones u omisiones realizadas en el procedimiento. Así como si la autoridad actuó con la debida diligencia.

d) La afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso: Violación a sus derechos humanos.

De modo que, cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas; o bien, cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional o cuasi jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que es una excluyente de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario, como ha acontecido en el caso que nos ocupa.

Argumento que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro *“TÉRMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO.”*, visible en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.

Razones por las cuales cabe concluir que, la resolución al recurso de revisión se solventa hasta esta fecha, debido a que existe una excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad de los recursos materiales y humanos con que cuenta este Instituto para atender la enorme demanda de usuarios que acuden para que se les garantice su Derecho de acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, aunado a la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente, la extensión de los escritos y pruebas aportadas y desahogadas por las partes; lo que impide la tramitación de los recursos dentro de los términos legales previamente establecidos por la Ley, por tratarse de causas de fuerza mayor.

Al respecto, también son de considerar los criterios sostenidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubros y datos de identificación son los siguientes:

*“****PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO****.”* consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002351.

*“****PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS****.”*, visible en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002350.

Por ello, este organismo garante comprometido con la tutela de los derechos humanos confiados, señala que este exceso del plazo legal para resolver el presente asunto, resulta de carácter excepcional.

**8. Cierre de instrucción.** Una vez transcurrido el periodo otorgado a las partes para realizar sus manifestaciones y no habiendo documentos que integrar al expediente, con fecha **diecisiete de enero de dos mil veinticuatro,** la Comisionada Ponente determinó el cierre de instrucción en términos de la fracción VI del artículo 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

En razón de que fue debidamente sustanciado el expediente electrónico y no existe diligencia pendiente de desahogo, se emite la Resolución que conforme a Derecho proceda, de acuerdo con los siguientes:

**II. C O N S I D E R A N D O S**

**Primero. Competencia.** El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5 párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, fracción II; 29, 36 fracciones I y II; 176, 178, 181, 185, fracción I, 186 y 188 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 9, fracciones I y XXIII y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

**Segundo. Oportunidad y Procedibilidad del Recurso de Revisión**. Previo al estudio del fondo del asunto, se procede a analizar los requisitos de oportunidad y procedibilidad que debe reunir el recurso de revisión interpuesto, previstos en los artículos 178 y 180 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

El recurso de revisión fue interpuesto dentro del plazo de quince días hábiles, previsto en el artículo 178 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, toda vez que el **Sujeto Obligado** remitió la respuesta a la solicitud de información el día **cinco de julio de dos mil veintitrés,** mientras que el recurso de revisión interpuesto por la parte **Recurrente**, se tuvo por presentado el día **cinco de julio de dos mil veintitrés**, esto es el mismo día en que tuvo conocimiento de la respuesta impugnada. En este sentido, se concluye que el presente recurso de revisión se encuentra dentro de los márgenes temporales previstos en las disposiciones legales referidas.

Sin que contraríe a lo anterior, el artículo 178 en análisis, refiere que el plazo de quince días hábiles se contará a partir del día siguiente de la fecha en que el afectado tuvo conocimiento de la resolución materia de impugnación, ya que ello debe entenderse para el efecto de que transcurrido dicho plazo ya no podrá presentarse el medio de impugnación o si es que se presenta, el mismo se considerará extemporáneo, no así cuando el medio de defensa se interponga antes de que comience a correr el plazo legal; tiene aplicación por analogía, la jurisprudencia 1ª. /J.41/2015, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, página 569 de la Décima época que lleva por rubro y texto los siguientes:

***“RECURSO DE RECLAMACIÓN. SU INTERPOSICIÓN NO ES EXTEMPORÁNEA SI SE REALIZA ANTES DE QUE INICIE EL PLAZO PARA HACERLO****. Conforme al artículo 104, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el recurso de reclamación podrá interponerse por cualquiera de las partes, por escrito, dentro del término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de la resolución impugnada. Ahora bien, dicho numeral sólo refiere que el aludido medio de defensa no puede hacerse valer después de tres días, por tanto, no impide que el escrito correspondiente se presente antes de iniciado ese término. De ahí que si dicho recurso se interpone antes de que inicie el plazo para hacerlo, su presentación no es extemporánea.”*

Al mismo tiempo, por cuanto hace a la procedibilidad del recurso de revisión, una vez realizado el análisis de los formatos de interposición del recurso, se concluye la acreditación plena de los elementos formales precisados por el artículo 180 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en atención a que fue presentado mediante el formato visible en el SAIMEX.

Finalmente, se advierte que resulta procedente la interposición del recurso, según lo manifestado por la parte **Recurrente** en sus motivos de inconformidad, de acuerdo al artículo 179, fracción IV del ordenamiento legal citado, que a la letra dice:

*“****Artículo 179.*** *El recurso de revisión es un medio de protección que la Ley otorga a los particulares, para hacer valer su derecho de acceso a la información pública, y procederá en contra de las siguientes causas:*

…

***IV****. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;”*

**Tercero. Materia de la revisión.** De la revisión a las constancias y documentos que obran en el expediente electrónico se advierte, que el tema sobre el que este Organismo Garante de Transparencia y Acceso a la Información se pronunciará será: **verificar si la información proporcionada por el Sujeto Obligado es adecuada y suficiente para satisfacer el derecho de acceso a la información pública** de la parte **Recurrente**, o en su defecto, en caso de ser procedente, ordenar la entrega de información.

**Cuarto. Estudio del asunto.** En primer lugar, es conveniente mencionar que de conformidad con el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona, privilegiando el principio de máxima publicidad, como así lo establece dicha determinación, que a continuación se trascribe para un mejor entendimiento:

*“****Artículo 4****. El derecho humano de acceso a la información pública es la prerrogativa de las personas para buscar, difundir, investigar, recabar, recibir y solicitar información pública, sin necesidad de acreditar personalidad ni interés jurídico.*

***Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona****, en los términos y condiciones que se establezcan en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General, la presente Ley y demás disposiciones de la materia, privilegiando el principio de máxima publicidad de la información. Solo podrá ser clasificada excepcionalmente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios 29 como reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos de las causas legítimas y estrictamente necesarias previstas por esta Ley.*

***Los sujetos obligados deben poner en práctica, políticas y programas de acceso a la información que se apeguen a criterios de publicidad, veracidad, oportunidad, precisión y suficiencia en beneficio de los solicitantes****.”(Sic)*

Esto es, que los Sujetos Obligados tiene la obligación o deber de atender las solicitudes de acceso a la información pública que se les hagan de su conocimiento y proporcionar la información pública que obren en su poder conforme el estado que se encuentra y no hacer un procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del solicitante; como así lo establece el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que a la letra dice:

***“Artículo 12.-*** *Quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.*

***Los sujetos obligados sólo proporcionarán la información pública que se les requiera y que obre en sus archivos y en el estado en que ésta se encuentre****.* ***La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante; no estarán obligados a generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones.” (Sic)***

Es decir, que todo sujeto obligado que genere, recopile, administre, procese, archive, posea o conserven, son responsables de la misma teniendo a su vez la obligación de proporcionar la información que se les requiera sin necesidad de resumirla, efectuar procedimientos para obtenerla, calcular y practicar investigaciones; en otras palabras, que los Sujetos Obligados solo se concretaran a proporcionar la información solicitada que tengan en su poder en el estado que se encuentran, sin necesidad de concretarse al interés o términos específicos del solicitante.

Sirve de apoyo a lo anterior, el Criterio de interpretación con clave de control SO/003/2017, emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, que por rubro y texto, dispone lo siguiente:

*“****No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información.*** *Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información.”(Sic)*

En esa tesitura, el artículo 24 en su último párrafo de la Ley de la Materia, dispone que los Sujetos Obligados sólo proporcionarán la información pública que generen, administren o posean en el ejercicio de sus atribuciones; por consiguiente, la información pública se encuentra a disposición de cualquier persona, lo que implica que es deber de los Sujetos Obligados, garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública.

En conclusión, el derecho de acceso a la información pública, consiste en que la información solicitada conste en un documento en cualquiera de sus formas, a saber: expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los Sujetos Obligados; los que, podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico de conformidad con el artículo 3, fracción XI de la Ley de la materia, el cual señala lo siguiente:

*“****Artículo 3.*** *Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*

*…*

***XI. Documento:*** *Los expedientes, reportes, estudios, actas****,*** *resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus servidores públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico…” (Sic)*

Siendo aplicable, el Criterio de interpretación en el orden administrativo número 0002-11, emitido por Acuerdo del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México “Gaceta del Gobierno”, el diecinueve de octubre de dos mil once, cuyo rubro y texto refieren lo siguiente:

**“*INFORMACIÓN PÚBLICA, CONCEPTO DE, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA. INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 2°, FRACCIÓN V, XV, Y XVI, 3°, 4°, 11 Y 41.*** *De conformidad con los artículos antes referidos, el derecho de acceso a la información pública, se define en cuanto a su alcance y resultado material, el acceso a los archivos, registros y documentos públicos, administrados, generados o en posesión de los órganos u organismos públicos, en virtud del ejercicio de sus funciones de derecho público, sin importar su fuente, soporte o fecha de elaboración.*

*En consecuencia el acceso a la información se refiere a que se cumplan cualquiera de los siguientes tres supuestos:*

***1)*** *Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea generada por los Sujetos Obligados;*

***2)*** *Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea administrada por los Sujetos Obligados, y*

***3)*** *Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, se encuentre en posesión de los Sujetos Obligados.” (Sic)*

Lo anterior, siempre y cuando no se trate de información clasificada como reservada o confidencial, cuya difusión pueda lesionar el interés jurídicamente protegido por la Ley, producir un daño mayor que el interés de conocerse, o bien, generar un daño en los derechos de las personas, debiendo tener audacia los Sujetos Obligados para cuidar esta información a través del acuerdo clasificatorio del comité de transparencia y la versión pública que emita el servidor público habilitado de cada Sujeto Obligado; como así se establece en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

En el mismo tenor, los artículos 6, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, establecen que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos estatales y municipales, así como del gobierno y de la administración pública municipal y sus organismos descentralizados, asimismo de cualquier persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por las razones previstas en la Constitución Federal por interés público y seguridad, en los términos que fijen las leyes de la materia.

Ahora bien, del análisis de la solicitud de información, motivo del recurso de revisión que ahora se resuelve, se advierte que la parte **Recurrente** requirió al **Sujeto Obligado** le proporcione, con base en el artículo 69 S Sexies, párrafo segundo, del Código Financiero del Estado de México y Municipios, que es del tenor literal siguiente:

*“****Sección Séptima***

***Del Impuesto a la Emisión de Gases Contaminantes a la Atmósfera***

***…***

***Artículo 69 S Sexies****…*

*Los recursos recaudados derivados del impuesto previsto en esta Sección, se destinarán a acciones para garantizar el derecho de las personas a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.”*

Lo siguiente:

1. Se indique si el Sujeto Obligado realizó, entre el uno de abril de dos mil veintidós y el cuatro de julio de dos mil veintitrés, alguna acción que haya sido financiada por el dinero recaudado por el Impuesto a la Emisión de Gases Contaminantes a la Atmósfera para el cumplimiento del artículo antes descrito.

En su caso, se indiquen tales acciones, y se desglose la información por:

(1) Fecha o rango de fechas en la que se realizó la acción.

(2) Descripción de la acción.

(3) Dependencia gubernamental que se encargó de realizar la acción.

(4) Nombres de los servidores públicos responsables de realizar la acción.

(5) Financiamiento o monto total invertido para realizar la acción.

2. Copia simple, en su versión pública, de toda expresión documental que dé cuenta de las acciones descritas en el numeral 1, de forma enunciativa más no limitativa, toda fotografía, factura, estado de cuenta, oficio, convenio firmado con la Secretaría de Finanzas, etc.

En respuesta, en términos de lo dispuesto en el artículo 167 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, la Unidad de Transparencia hizo del conocimiento de la persona solicitante que el **Sujeto Obligado**, no es competente para dar atención a la solicitud, y le sugirió dirigir su solicitud ante la instancia correspondiente.

Al no estar conforme con los términos de la respuesta emitida, la persona solicitante presentó el recurso de revisión que se resuelve, donde señaló como motivo de inconformidad, que no se fundamentó la incompetencia declarada por el **Sujeto Obligado,** así como tampoco se le orientó hacia los Sujetos Obligados que pudieran ser competentes para dar respuesta a su solicitud, asimismo, a su consideración refirió que los artículos 17, fracciones III, IX, X, XI, XII, XV del Reglamento Interior de la CEPANAF; 3 fracciones I, II, III y VI y 4, fracciones I, II, V, VI, VII, VIII, IX del Decreto del Ejecutivo del Estado por el que se transforma el Órgano Desconcentrado denominado Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna en Organismo Público Descentralizado, permiten suponer que el **Sujeto Obligado** sí es competente para responder la solicitud, por lo que la respuesta proporcionada transgrede los principios de certeza, máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia expresados en el artículo 8 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y vulnera sui derecho de acceso a la información, al no brindar certeza si realizó alguna acción financiada con el dinero recaudado por el Impuesto a la Emisión de Gases Contaminantes a la Atmósfera, del uno de abril de dos mil veintidós al cuatro de julio de dos mil veintitrés.

Una vez que se admitió el recurso de revisión y que se integró el expediente con la finalidad de que las partes manifestaran lo que a su derecho estimaran conveniente, el **Sujeto Obligado** ratificó en lo sustancial la respuesta proporcionada en primera instancia, mientras que la parte **Recurrente** fue omisa en ejercer dicha prerrogativa.

**- Del Derecho Humano a un medio ambiente sano**.

Atendiendo a la materia de la solicitud, en primer lugar se menciona que el medio ambiente es el espacio en el que se desarrolla la vida de los seres vivos y que permite la interacción de los mismos. Este sistema no solo está conformado por seres vivos, sea flora, fauna o incluso los seres humanos, sino también por elementos sin vida como el aire, el suelo y el agua, y por elementos artificiales entre los cuales incluimos a las relaciones socioeconómicas, como la urbanización, los conflictos dentro de una sociedad, etc.

A medida que la población comenzó a crecer y aumentar su tecnología, el impacto sobre el medio ambiente comenzó a ser mayor y más nocivo. El momento donde comenzó a agravarse exponencialmente en el medio ambiente fue a partir de la Revolución Industrial, principalmente por la explotación de recursos minerales y fósiles. De esta manera **el equilibrio del sistema ambiental se perdió y la calidad de vida de muchos seres vivos se halla desde ese momento en malas condiciones**.

El medio ambiente por su cuenta, suele mantenerse en equilibrio, sin embargo, la enorme incursión humana, sobre todo en los últimos dos siglos, ha hecho que se presente un desbalance capaz de generar graves consecuencias que están afectando ya a todos los habitantes del planeta.

Así, el Derecho humano a un ambiente sano, se encuentra reconocido en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en diversos instrumentos internacionales que persiguen la protección y conservación del medio ambiente.

Del precepto constitucional citado se desprende un mandato a todas las autoridades del Estado de garantizar la existencia a un medio ambiente sano y propicio para el desarrollo humanos y el bienestar de las personas. Este mandato vincula a todas las autoridades legislativas, administrativas y judiciales, quienes deben adoptar en el marco de sus competencias todas aquellas medidas que sean necesarias para la protección al ambiente.

Esa protección también tiene sustento en el ámbito internacional en el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también llamado “Protocolo de San Salvador”, cuyo artículo 11 establece que “toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”, e indica que los Estados tienen el deber de promover “la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente”.

En el mismo sentido, otros instrumentos internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente de 1972 (Declaración de Estocolmo), hace referencia al derecho fundamental de las personas de vivir en un medio ambiente de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, junto con la correspondiente obligación de los ciudadanos de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras.

La Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, también estableció algunos principios trascendentales, entre los cuales destacan el derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza, así como la obligación de los Estados de crear leyes eficaces de protección al medio ambiente.

Asimismo, la Carta de la Tierra, aprobada en el año 2000, establece la correlación entre el derecho al medio ambiente y el deber de protección, de tal manera, que “el derecho de poseer, administrar y utilizar los recursos naturales conduce hacia el deber de prevenir daños ambientales y proteger los derechos de la gente”.

De los anteriores instrumentos internacionales se derivan los siguientes aspectos:

i. Existe un reconocimiento al derecho a un medio ambiente sano;

ii. El Estado está vinculado a establecer medidas que protejan y permitan el desarrollo del derecho; y

iii Los ciudadanos están vinculados en la protección del medio ambiente.

Así, se puede establecer que este derecho se configura como un derecho-deber, es decir, el reconocimiento del derecho conlleva una vinculación estrecha con su deber de protección, tanto del Estado como de los particulares.

En este mismo sentido, en la Controversia Constitucional 95/2004, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el derecho a un medio ambiente sano se desarrolla como un “**poder de exigencia y un deber de respeto a todos los ciudadano de preservar la sustentabilidad del entorno ambiental, que implica la no afectación ni lesión a éste y, con la obligación correlativa de las autoridades de vigilancia, conservación y garantía de que sean atendidas las regulaciones pertinentes**”, asimismo que la “**protección al medio ambiente y la preservación del equilibrio ecológico son formas a través de las cuales el Estado puede asegurar a las personas un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”**. Estas exigencias se materializan en la reglamentación legislativa que permite a los órganos de gobierno, sea federales o locales, llevar acciones necesarias para preservar y mantener el medio ambiente.

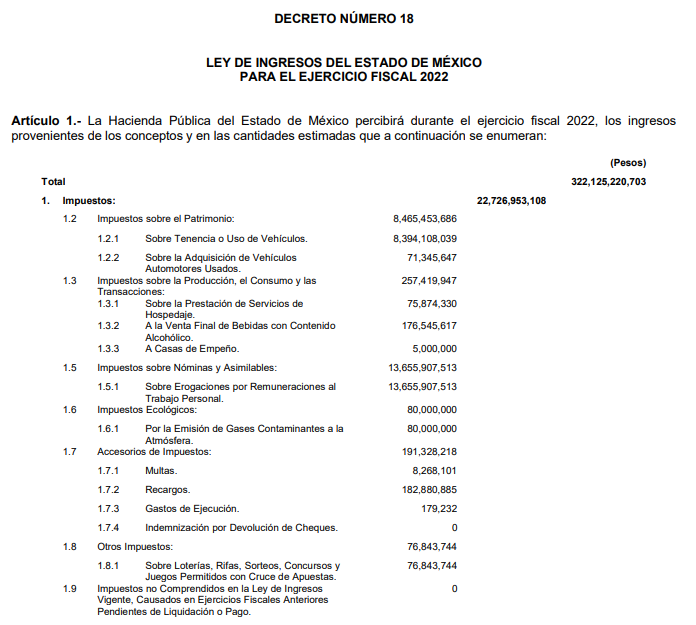
- **Del Impuesto Ecológico por la Emisión de Gases Contaminantes a la Atmósfera.**

Al respecto, es oportuno mencionar que mediante el Decreto número 18 de la LIX Legislatura del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, en fecha treinta y uno de enero de dos mil veintidós, por medio del cual se aprobó la Ley de Ingresos para el Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2022, se consideró procedente la adición del **Impuesto Ecológico por la Emisión de Gases Contaminantes a la Atmósfera,** con el propósito de generar medidas de mitigación al cambio climático, modificar el comportamiento de los generadores de contaminantes e incentivar el uso de diferentes tecnologías o productos que generen menores contaminantes.

Lo anterior, atendiendo a la política fiscal encaminada a la protección del ambiente, toda vez que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que **toda persona tiene Derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar,** siendo obligación del Estado garantizar el respeto a este Derecho, buscando que quien genere deterioro ambiental tenga una responsabilidad, por lo que en la iniciativa presentada, con el fin de proteger la naturaleza, mejorar el medio ambiente, generar medidas de mitigación al cambio climático a través de figuras impositivas que buscan modificar el comportamiento de los generadores de contaminantes e incentivar el uso de diferentes tecnologías o productos que generen menores contaminantes, se contempló incluir el Impuesto Ecológico por la emisión de Gases Contaminantes a la Atmosfera para establecer una cuota impositiva por toneladas de dióxido de carbono emitidas.

Siendo importante mencionar que, de conformidad la exposición de motivos de la Iniciativa de Ley, el establecimiento de dicho impuesto ecológico, no tendría fines recaudatorios, sino que el ingreso obtenido se destinaría a **acciones para mejorar la condición ambiental** en el Estado de México.

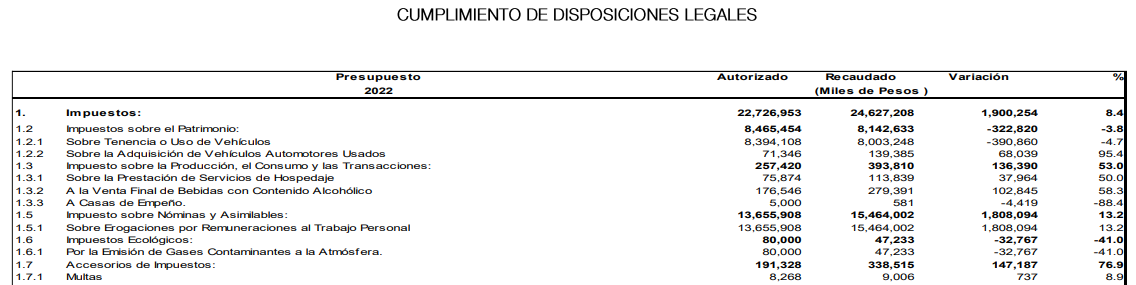
En este contexto, en el artículo 1, numeral 1.6, de la Ley de Ingresos para el Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2022, se estimó la percepción de ochenta millones de pesos ($80,000,000) provenientes del Impuesto ecológico por la Emisión de Gases Contaminantes a la Atmósfera, como se observa en seguida:



Cabe señalar que dicho impuesto, de conformidad con el artículo 3, párrafo primero de la Ley de Ingresos, **es recaudado por la Secretaría de Finanzas,**  a través de la Caja General del Gobierno de la Subsecretaría de Tesorería, como se lee en seguida:

*“****Artículo 3****.- L****os ingresos provenientes de los conceptos enumerados en el artículo 1 de esta Ley se recaudarán por la Secretaría de Finanzas en la Caja General*** *de Gobierno de la Subsecretaría de Tesorería; en instituciones del sistema financiero mexicano o en los establecimientos autorizados para realizar las gestiones inherentes a la recaudación, así como por los ayuntamientos con los que se convenga que realicen por cuenta de la Dependencia, la captación de los ingresos públicos para su concentración correspondiente al erario estatal, salvo los ingresos propios de Organismos Autónomos y de los poderes Legislativo y Judicial, así como los afectos en fideicomisos de garantía, fuente de pago o administración e inversión, los cuales serán percibidos de manera directa. Para tal efecto, la Secretaría de Finanzas publicará en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, las Reglas de Carácter General que fijen los requisitos, obligaciones y procedimientos relativos a la captación o recepción y los comprobantes de pago de los ingresos.”*

Asimismo, no obsta mencionar que de conformidad con la Cuenta Pública del Gobierno, Organismos Auxiliares y Autónomos del Estado de México del ejercicio 2022, se recaudó únicamente la cantidad de cuarenta y siete millones doscientos treinta y tres mil pesos ($47,233,000), por el Impuesto ecológico por la Emisión de Gases Contaminantes a la Atmósfera, es decir, hubo una variación de 41% menos de lo estimado en la Ley de Ingresos 2022, como se observa a continuación:



Por otro lado, mediante el Decreto número 21 de la LIX Legislatura del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México, en fecha treinta y uno de enero de dos mil veintidós, entre otras modificaciones, se aprobó la adición al Código Financiero del Estado de México y Municipios, de la **Sección Séptima** denominada **Del Impuesto a la Emisión de Gases Contaminantes a la Atmósfera** con los artículos 69 S, 69 S Bis, 69 S Ter, 69 S Quáter, 69 S Quinquies **y 69 S Sexies**; el cual busca gravar actividades que por su accionar causan daños o externalidades negativas en el ambiente, por resultar necesaria la **obtención de recursos que se destinarán a preservar y garantizar el derecho de las personas a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar**.

* **De las atribuciones del Sujeto Obligado**

Por cuanto hace a la competencia del **Sujeto Obligado,** es oportuno partir de lo establecido en el Decreto del Ejecutivo del Estado por el que se transforma el Órgano Desconcentrado Denominado Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna en Organismo Público Descentralizado.

En este tenor, de conformidad con el artículo 3 del Decreto en mención, la Comisión tiene por objeto contribuir al desarrollo sustentable del Estado de México en materia de recursos naturales y **preservación del medio ambiente; desarrollar programas y acciones** para **reducir el deterioro de los ecosistemas y recursos naturales del Estado;** promover y establecer los instrumentos y mecanismos necesarios para el conocimiento, uso y **conservación de la biodiversidad,** creando y fomentando la investigación científica; organizar, conservar, vigilar, controlar y administrar lo relativo a la utilización y aprovechamiento de las áreas naturales protegidas, reservas, parques y zoológicos; así como coordinar las acciones de forestación aprobadas por el ejecutivo dentro de los parques, áreas naturales protegidas y zoológicos.

Asimismo, para lograr dicho objeto, se le confieren las siguientes atribuciones de conformidad con el artículo 4 del Decreto:

- Elaborar y proponer programas y acciones para crear, proteger, fomentar, conservar, y utilizar racionalmente los recursos renovables de flora y fauna, comprendidos dentro de las áreas declaradas como parques naturales de creación popular y en los zoológicos establecidos dentro del territorio del Estado.

- Coordinar sus actividades con dependencias y organismos federales, estatales y municipales, organismos internacionales o con organizaciones no gubernamentales para el cumplimiento de su objeto.

- Proponer al Ejecutivo del Estado la creación o ampliación de parques y de reservas de flora y fauna, así como de zoológicos.

- Vigilar y controlar los parques estatales, áreas naturales protegidas, reservas y zoológicos con arreglo en las disposiciones legales en la materia.

- Administrar los parques federales concesionados por las autoridades federales al Estado.

- Promover mecanismos de coordinación para la forestación de parques, áreas naturales protegidas y zoológicos y demás trabajos que se determinen para esas áreas.

- Formular y proponer al Ejecutivo del Estado, programas para el establecimiento de cotos de caza para la práctica del deporte cinegético.

- Organizar, conservar, vigilar, controlar y administrar todo lo relativo a la utilización y aprovechamiento de los parques, reserva de fauna y zoológicos.

Por su parte, el Manual General de Organización de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, establece como objetivo general de la Comisión el de **contribuir a la preservación del equilibrio ecológico** del Estado de México, **a través de la conservación y aprovechamiento racional de los recursos** naturales en las áreas naturales protegidas, así como brindar a la ciudadanía alternativas de recreación y esparcimiento que procuren el arraigo de la población en su lugar de origen.

En este orden de ideas, derivado de las atribuciones que la normativa le confiere al del **Sujeto Obligado** para el cumplimiento de su objeto, se colige que este lleva a cabo diferentes acciones que implícitamente conllevan la protección del medio ambiente, reducir el deterioro de los ecosistemas, preservar los recursos naturales, mejorar la condición ambiental, entre otras que garantizan invariablemente a las personas el Derecho a un medio ambiente sano, que les permite desarrollarse de manera plena, contrarrestando el deterioro ambiental y los efectos que el mismo puede tener sobre los seres vivos.

Atento a lo anterior, respecto al tema que nos ocupa, el artículo 17 del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna en Organismo Público Descentralizado, así como el Manual General de Organización, confieren a la Subdirección de Administración y Finanzas, en su parte conducente, las siguientes atribuciones:

- **Coordinar la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos Anual**, en coordinación con las unidades administrativas que conforman a la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna.

- **Someter a consideración de la persona titular** de la Dirección General **el ejercicio del presupuesto autorizado,** así como la gestión de transferencias, reducciones o ampliaciones de los recursos financieros.

- **Vigilar el adecuado ejercicio del presupuesto** asignado a cada unidad administrativa de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna.

- **Programar, organizar y controlar el suministro, administración y aplicación de los recursos** humanos, materiales, **financieros** y técnicos; así como los servicios generales necesarios para el funcionamiento de las unidades administrativas de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna.

- **Analizar los estados financieros** de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna.

- **Mantener actualizados los sistemas de contabilidad y control presupuestal** que coadyuven al adecuado manejo de los recursos financieros disponibles.

- **Controlar el ejercicio del presupuesto autorizado**, **de acuerdo con lo programado**, así como tramitar las transferencias, reducciones o ampliaciones de los recursos financieros.

- Coordinar la integración de informes contables y financieros de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, para su envío a las instancias correspondientes.

Como se advierte, la Subdirección de Administración y Finanzas cuenta con atribuciones para programar, organizar y controlar la administración de los recursos financieros a las unidades administrativas que integran la estructura orgánica del **Sujeto Obligado**, de conformidad con las normas y políticas establecidas en la materia, por lo que, **de haber recibido recursos provenientes del Impuesto a la Emisión de Gases Contaminantes a la Atmósfera, derivado de la asignación presupuestal del Poder Ejecutivo, sujeta al control presupuestario del Poder Legislativo, que debieran destinarse a acciones para garantizar el derecho de las personas a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar,** dicha instancia sería competente para generar, administrar o poseer información relacionada con el financiamiento, erogaciones, o monto total invertido derivado de dichas acciones, asimismo, pudiera conocer la fecha o rango de fechas en las que se realizaron las acciones, la descripción de la acción, así como la unidad administrativa del Sujeto Obligado que se encargó de realizar las acciones, que en su caso, pudiera proporcionar el soporte documental que dé cuenta de las acciones implementadas.

Sin embargo, es de señalar que de las constancias que obran en el expediente, se advierte que la Unidad de Transparencia no observó lo previsto en los artículos 53, fracción IV y 162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, pues no obra registro de que hubiera turnado la solicitud a las áreas que de acuerdo con sus competencias o funciones, pudieran haber generado, administren o posean la información que es del interés de la persona solicitante, ya que se limitó a referir que el **Sujeto Obligado** no contaba con competencia para dar atención a la solicitud, argumento que reiteró mediante la etapa de manifestaciones.

Al respecto, se menciona que el procedimiento de búsqueda, se constituye como la garantía primaria del derecho humano de acceso a la información pública, el cual se rige por los principios de simplicidad, rapidez, gratuidad del procedimiento, auxilio y orientación a los particulares con el fin de otorgar la protección más amplia de éste derecho, para ello la misma norma establece que los sujetos obligados deberán otorgar el acceso a los documentos que obren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo a sus facultades, competencias o funciones; por ende, al recibir una solicitud de acceso a la información pública, y como fue referido, las solicitudes se tendrán que turnar al área competente para brindar contestación, por lo que la misma Ley indica que serán los Sujetos Obligados quienes establecerán la forma y términos en que darán trámite interno a las solicitudes que no podrán exceder de los periodos establecidos para brindar respuesta, tal cual se desprende de los siguientes artículos:

*“****Artículo 160****. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre así lo permita.*

*En caso que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en formatos abiertos.*

***Artículo 163****. La Unidad de Transparencia deberá notificar la respuesta a la solicitud al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquélla.*

*Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por siete días hábiles más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento. No podrán invocarse como causales de ampliación del plazo motivos que supongan negligencia o descuido del sujeto obligado en el desahogo de la solicitud.*

***Artículo 165.*** *Los sujetos obligados establecerán la forma y términos en que darán trámite interno a las solicitudes en materia de acceso a la información.*

*La información que se entregue en versión pública, cuya modalidad de reproducción o envío tenga un costo, procederá una vez que se acredite el pago respectivo. No puede entenderse como reproducción la elaboración de la misma.*

*Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda el acceso, los costos de reproducción y envío correrán a cargo del sujeto obligado.”*

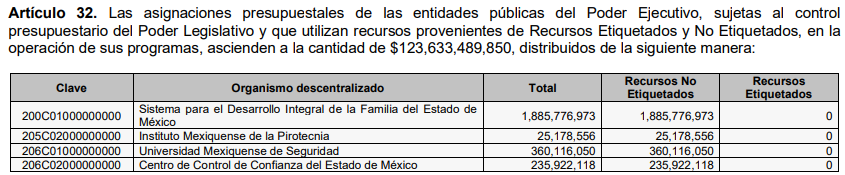
En este sentido, el procedimiento de acceso a la información pública se tendrá por cumplido cuando la persona solicitante tenga a su disposición la información requerida, o en su caso, cuando realice la consulta de la misma en el que esta se localice, situación que no se advierte en el presente caso, toda vez que el **Sujeto Obligado**, a través de su Unidad de Transparencia no ha brindado el acceso a la información solicitada, por ende para tener por satisfecho el Derecho humano en mérito, es necesario que la Unidad de Transparencia en estricto apego al procedimiento descrito, realice una búsqueda exhaustiva y razonable de la información, turnando a las áreas competentes la solicitud con el objetivo de brindar contestación al requerimiento, y proceda a la entrega del soporte documental en versión pública de ser necesario que dé cuenta de lo solicitado, en términos de los artículos 12, último párrafo y 24, último párrafo de la Ley de la materia, referidos con antelación, esto es, en el estado en el que se encuentre en sus archivos, ya que la obligación de transparencia no implica que los entes públicos generen información o practiquen investigaciones con la finalidad de atender las solicitudes conforme al interés de los solicitantes, conforme al Criterio de interpretación SO/003/2017, emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI.

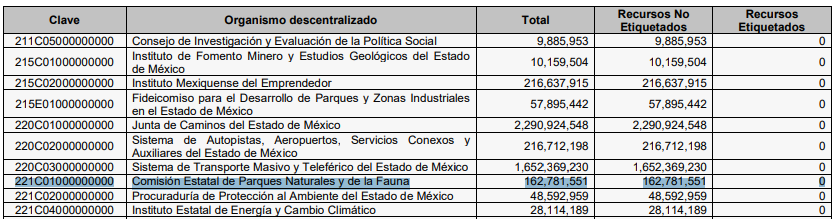
Para efectos de lo anterior, no debe pasar desapercibido que la parte **Recurrente** eligió que la modalidad de entrega de la información a través del SAIMEX, sin embargo, dentro del texto de la solicitud precisó le fueran expedidas **copias simples** respecto del punto 2, por tanto, este Instituto considera que la entrega de la información vía Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX) puede homologarse a la modalidad elegida por la parte **Recurrente**.

Toda vez que la impresión del archivo digital que remita en cumplimiento de la resolución comparte la misma naturaleza de una copia simple, adicionalmente, la entrega de información vía SAIMEX otorga el beneficio de disponer inmediata y gratuitamente de la información solicitada; consecuentemente, se determina que en aras de privilegiar el derecho del particular y toda vez que el ejercicio de la acción fue a través del Sistema y preciso en el apartado respectivo la entrega a través del sistema referido, por lo que atendiendo a los principios de máxima publicidad y pro persona, es que se considera viable que la información se entregue a través del SAIMEX.

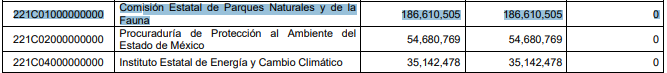
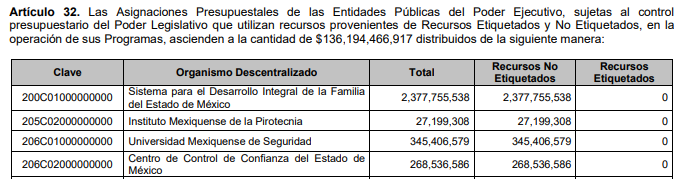
Por otro lado, sin contrariar lo expuesto, es de suma importancia mencionar que, si bien derivado del estudio efectuado se concluyó que el **Sujeto Obligado** cuenta con atribuciones para llevar a cabo acciones que protegen el medio ambiente, preservan el equilibrio de los ecosistemas, entre otras a través de las cuales el Estado puede asegurar a las personas un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, garantizando así el Derecho humano a un medio ambiente sano, asimismo que recibe recursos del Estado como parte de la asignación presupuestal del Poder Ejecutivo, derivado de los recursos captados por la Secretaría de Finanzas, lo cierto es que de la normativa aplicable no se advirtió que perciba recursos provenientes específicamente, del Impuesto a la Emisión de Gases Contaminantes a la Atmósfera, y, de ser el caso, que dichos recursos estén plenamente identificados y deba contar con un registro o control del ejercicio de los mismos, ya que del presupuesto de egresos de los ejercicios 2022 y 2023, no se advirtió que se le hubieran asignado recursos etiquetados, como se ilustra a continuación:

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022**





**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023**

****

En consecuencia, si derivado de la búsqueda exhaustiva y razonable que se ordena no llegara a localizar información por no haber recibido recursos provenientes del Impuesto a la Emisión de Gases Contaminantes a la Atmósfera, que debieran destinarse a acciones para garantizar el derecho de las personas a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, o bien, que de haberlos recibido, no le sea posible identificar de manera clara el monto recibido así como el ejercicio de los mismos, bastará con que así se haga del conocimiento de la persona solicitante para tener por colmado su derecho de acceso a la información, en términos de lo dispuesto por el artículo 19, párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, a saber:

*“****Artículo 19****…*

*En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven tal circunstancia.”*

Siendo improcedente, en tal supuesto, la entrega de documento alguno, o en su caso, el Acuerdo de Inexistencia, toda vez que el pronunciamiento del **Sujeto Obligado** declararía en automática la inexistencia de la información solicitada de modo que no existe obligación de justificar o allegar pruebas, y por ende no tiene aplicación lo estatuido en el artículo 49, fracción XIII[[1]](#footnote-1) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

De lo hasta aquí expuesto, se concluye que los motivos de inconformidad de la parte **Recurrente** devienen fundados, siendo procedente *Revocar* la respuesta proporcionada por el **Sujeto Obligado** en términos del artículo 186 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**Quinto. Versión Pública.** Finalmente, debe señalarse que de ser el caso en que los documentos que vayan a ser entregados para dar cumplimiento a la presente resolución, contengan datos que deban ser clasificados, el **Sujeto Obligado** deberá hacer la elaboración de la versión pública de tales documentos a fin de satisfacer el derecho de acceso a la información pública de la parte **Recurrente** sin menoscabo al derecho a la protección de los datos personales de terceros.

Para efectos de la elaboración de la versión pública se deberá observar lo dispuesto por los artículos 3 fracciones IX, XX, XXI y XLV, 91, 132 fracciones II y III, y 143 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios que establecen:

*“****Artículo 3****. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*

*[…]*

***IX. Datos personales****: La información concerniente a una persona, identificada o identificable según lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México;*

***XX. Información clasificada****: Aquella considerada por la presente Ley como reservada o confidencial;*

***XXI. Información confidencial:*** *Se considera como información confidencial los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos;*

***XLV. Versión pública:*** *Documento en el que se elimine, suprime o borra la información clasificada como reservada o confidencial para permitir su acceso.*

*[…]*

***Artículo 91.*** *El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando ésta sea clasificada como reservada o confidencial.*

***Artículo 132.*** *La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:*

***I****. Se reciba una solicitud de acceso a la información;*

***II.*** *Se determine mediante resolución de autoridad competente; o*

***III.*** *Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en esta Ley.*

*[…]*

***Artículo 143****. Para los efectos de esta Ley se considera información confidencial, la clasificada como tal, de manera permanente, por su naturaleza, cuando:*

***I.*** *Se refiera a la información privada y los datos personales concernientes a una persona física o jurídico colectiva identificada o identificable;*

***II.*** *Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos; y*

***III.*** *La que presenten los particulares a los sujetos obligados, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.*

*La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello.*

*No se considerará confidencial la información que se encuentre en los registros públicos o en fuentes de acceso público, ni tampoco la que sea considerada por la presente ley como información pública.”*

Igualmente, lo establecido en los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que tienen por objeto establecer los criterios con base en los cuales los sujetos obligados clasificarán como reservada o confidencial la información que posean, desclasificarán y generarán, en su caso, versiones públicas de expedientes o documentos que contengan partes o secciones clasificadas.

Entorno a lo que aquí nos interesa, los Lineamientos Quincuagésimo, Quincuagésimo primero, Quincuagésimo segundo, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas señalan las formalidades que deberá llevar el acuerdo de clasificación que deberá emitir el **Sujeto Obligado**, siendo estas las siguientes:

***“Quincuagésimo.*** *Los titulares de las áreas de los sujetos obligados podrán establecer sus propios modelos o formatos para la elaboración de versiones públicas de documentos o expedientes, siempre y cuando cumplan lo establecido en los presentes Lineamientos, así como en las correspondientes Leyes Generales.*

***Quincuagésimo primero.*** *Toda acta del Comité de Transparencia deberá contener:*

***I.*** *El número de sesión y fecha;*

***II****. El nombre del área que solicitó la clasificación de información;*

***III****. La fundamentación legal y motivación correspondiente;*

***IV****. La resolución o resoluciones aprobadas; y*

***V****. La rúbrica o firma digital de cada integrante del Comité de Transparencia.*

*Las resoluciones del Comité en las que se haya determinado confirmar o modificar la clasificación de información pública como reservada, deberán incluir, cuando menos:*

***I.*** *Los motivos y razonamientos que sustenten la confirmación o modificación de la prueba de daño;*

***II****. Descripción de las partes o secciones reservadas, en caso de clasificación parcial****;***

***III.*** *El periodo por el que mantendrá su clasificación y fecha de expiración; y*

***IV.*** *El nombre del titular y área encargada de realizar la versión pública del documento, en su caso.*

*En los casos en que se clasifique la información como reservada siempre se entregará o anexará la prueba de daño con la respuesta al solicitante.*

*En los casos de resoluciones del Comité de Transparencia en las que se confirme la clasificación de información confidencial solo se deberán de identificar los tipos de datos protegidos, de conformidad con el lineamiento trigésimo octavo.*

***Quincuagésimo segundo****. Para la clasificación y elaboración de versiones públicas de documentos que contengan información clasificada como reservada o confidencial, las áreas de los sujetos obligados deberán tomar las medidas pertinentes tendientes a asegurar que el espacio utilizado para testar la información no podrá ser empleado para la sobreposición de contenido distinto al autorizado por el Comité.*

*En el caso especifico de la clasificación y elaboración de versiones públicas de documentos que contengan información confidencial, las áreas de los sujetos obligados deberán:*

***I.*** *Fijar la fecha en que se elaboró la versión pública y la fecha en la cual el Comité de Transparencia confirmó dicha versión;*

***II.*** *Señalar dentro del documento el tipo de información confidencial que fue testada en cada caso específico, de conformidad con el lineamiento trigésimo octavo; y*

***III.*** *Señalar las personas o instancias autorizadas a acceder a la información clasificada.*

*En los documentos de difusión electrónica, señalar en la primera hoja y en el nombre del archivo, que la versión pública corresponde a un documento que contiene información confidencial.”*

En relación directa con ello deberá observar el Lineamiento Quincuagésimo tercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información supraindicados, que establece los formatos para la clasificación de los documentos, conforme a lo siguiente:

***CAPÍTULO VIII***

***DE LOS ELEMENTOS PARA LA CLASIFICACIÓN***

*…*

***Quincuagésimo tercero. El formato para señalar la clasificación de un documento o expediente que contenga información reservada,*** *es el siguiente:*

******

******

******

*Los documentos que integren un expediente reservado en su totalidad no deberán marcarse en lo individual.*

*Una vez desclasificados los expedientes, si existieren documentos que tuvieran el carácter de reservados deberán permanecer o ser marcados.”*

Asimismo, deberá observar los Lineamientos Quincuagésimo cuarto, Quincuagésimo quinto, Quincuagésimo sexto, Quincuagésimo séptimo y Quincuagésimo octavo, establecen lo siguiente:

*“****Quincuagésimo cuarto.*** *Cuando el Comité de Transparencia confirme la clasificación de documentos reservados y/o confidenciales, sea total o parcialmente; se deberá anexar al expediente la resolución que determinó la clasificación o, en su defecto, identificar en la carátula del expediente del cual formen parte, la fecha y sesión del Comité de Transparencia en la que se confirmó dicha clasificación.*

***Quincuagésimo quinto.*** *Cada área del sujeto obligado podrá designar formalmente a una o más personas como responsables del testado, que sean encargadas de la adecuada elaboración o supervisión de las versiones públicas de los documentos o expedientes, verificando que cumplan con los requisitos señalados en las Leyes Generales, los presentes Lineamientos y demás normativa aplicable antes de su confirmación por el Comité de Transparencia.*

***...***

***Quincuagésimo séptimo****. Se considera, en principio, como información pública y no podrá omitirse de las versiones públicas la siguiente:*

***I****. La relativa a las Obligaciones de Transparencia que contempla el Título V de la Ley General y las demás disposiciones legales aplicables;*

***II.*** *El nombre de los integrantes de los sujetos obligados en los documentos, y sus firmas autógrafas o digitales, cuando sean utilizados en el ejercicio de las facultades conferidas para el desempeño del servicio público, y*

***III****. La información que documente decisiones y los actos de autoridad concluidos de los sujetos obligados, así como el ejercicio de las facultades o actividades de los servidores públicos, de manera que se pueda valorar el desempeño de los mismos.*

*Lo anterior, siempre y cuando no se acredite alguna causal de clasificación, prevista en las leyes o en los tratados internacionales suscritas por el Estado mexicano.*

***Quincuagésimo octavo****. Los sujetos obligados garantizarán que los sistemas o medios empleados para eliminar la información en las versiones públicas sean irreversibles, de tal forma que no permitan su recuperación o la visualización de la misma.”*

Por lo tanto, la entrega de documentos en su versión pública debe acompañarse necesariamente del Acuerdo del Comité de Transparencia que la sustente el cual debe estar debidamente fundado y motivado, en el que se expongan los fundamentos y razonamientos que llevaron al **Sujeto Obligado** a testar, suprimir o eliminar datos de dicho soporte documental, ya que no hacerlo, se reitera que lo entregado no tendría un sustento jurídico ni resultaría ser una versión pública, sino más bien una documentación ilegible, incompleta o tachada; ya que el no justificar las causas o motivos por las que no se aprecian determinados datos -ya sea porque se testan o suprimen- deja al solicitante en estado de incertidumbre, al no conocer o comprender porque no aparecen en la documentación respectiva.

Así, con fundamento en lo prescrito en los artículos 5 párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, fracción II; 29, 36 fracciones I y II; 176, 178, 181, 185 y 186 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, este Pleno:

**III. R E S U E L V E**

**Primero.** Resultan **fundados** los motivos de inconformidad hechos valer por la parte **Recurrente** en el recurso de revisión **03919/INFOEM/IP/RR/2023,** por lo que, en términos del Considerando **Cuarto** de la presente resolución, se **Revoca** la respuestadel **Sujeto Obligado.**

**Segundo.** Se **Ordena** al **Sujeto Obligado**, en términos de los Considerandos **Cuarto** y **Quinto** de esta resolución, haga entrega vía SAIMEX, previa búsqueda exhaustiva y razonable, en versión pública de ser procedente, de lo siguiente:

1. Acciones realizadas para garantizar el derecho de las personas a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, financiadas con recursos provenientes del Impuesto a la Emisión de Gases Contaminantes a la Atmósfera, del uno de abril de dos mil veintidós al cuatro de julio de dos mil veintitrés*,* precisando al mayor grado de desagregación posible, lo siguiente:

a. Fecha o rango de fechas en las que se realizó la acción.

b. Descripción de la acción

c. Unidad administrativa que se encargó de realizar la acción.

d. Nombre de los servidores públicos responsables de realizar la acción.

e. Financiamiento o monto total invertido o erogado para realizar la acción.

2. Expresión documental que dé cuenta de las acciones descritas en el numeral 1: fotografías, facturas, estados de cuenta, oficios, convenios firmados con la Secretaría de Finanzas.

*Para la entrega en versión pública, deberá emitir el Acuerdo del Comité de Transparencia en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en el que funde y motive las razones sobre los datos que se supriman o eliminen, que se deberá poner a disposición de la parte* ***Recurrente****.*

*En el supuesto que la información ordenada no obre en los archivos del* ***Sujeto Obligado*** *por no haberse generado, bastará con que así se haga del conocimiento de la parte* ***Recurrente****, en términos del artículo 19, párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.*

**Tercero. Notifíquese,** vía **SAIMEX**, al Titular de la Unidad de Transparencia del **Sujeto Obligado,** la presente resolución para que conforme a los artículos 186, último párrafo y 189, párrafo segundo y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de diez días hábiles, e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente, y, se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 198, 200, fracción III; 214, 215 y 216 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

De conformidad con el artículo 198 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de considerarlo procedente, el **Sujeto Obligado** de manera fundada y motivada, podrá solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de la presente resolución.

**Cuarto. Notifíquese,** vía **SAIMEX**, a la parte **Recurrente** la presente resolución, así como, que de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en caso de que considere que le causa algún perjuicio podrá impugnarla vía Juicio de Amparo en los términos de las leyes aplicables.

ASÍ LO RESUELVE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS, MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA, SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ, LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA; Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA, EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.

1. Artículo 49. Los Comités de Transparencia tendrán las siguientes atribuciones:

   XIII. Dictaminar las declaratorias de inexistencia de la información que les remitan las unidades administrativas y resolver en consecuencia; [↑](#footnote-ref-1)